



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

0564

integridad del ambiente, por cuanto, se prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

En ese contexto, las disposiciones normativas ambientales, protegen entre otros recursos la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional, entendiéndose por ella, el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado salvaje, salvo los peces y demás especies acuáticas, indicando que pertenece a la Nación; por tanto, corresponde a la administración pública, velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna silvestre, ejerciendo actividades de preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.

El Decreto Reglamentario 1608 de 1978, es claro en establecer que el aprovechamiento de la fauna silvestre, debe hacerse en forma eficiente, observando las disposiciones contenidas también en el Decreto - Ley 2811 de 1974, por lo cual, dicho aprovechamiento solo podrá adelantarse, mediante permiso, autorización o licencia, los cuales son personales e intransmisibles y no autorizan el ejercicio de actividades cuyo control corresponda a otras entidades o agencias del Estado.

Así las cosas, el artículo 196 del Decreto 1608 de 1978 en concordancia con el Artículo Tercero de la Resolución 438 de 2001, prevé la existencia del salvoconducto de movilización, para transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre, documento que amparará únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en él, siendo válido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo acto administrativo.

Unido a lo anterior, la disposición normativa, anteriormente citada, establece las obligaciones de carácter general en relación con la fauna silvestre, indicando entre otras, la de amparar la movilización de los individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre con el respectivo salvoconducto y exhibirlo cuando sea requerido por los funcionarios que ejercen el control y vigilancia, disposiciones legales que motivaron a la Policía Ecológica y Ambiental de Bogotá D.C., para solicitar en el Terminal de Transportes a la señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, el salvoconducto que amparara la movilización del Perico Patilico (*Pionites melanocephala*) y al no portarlo, disponer su incautación preventiva.

De acuerdo con lo anterior, es claro para esta Secretaría, que la señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, transgredió la normatividad ambiental relacionada con la movilización de la especie de fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto, desde el municipio de Granada hasta la ciudad de Bogotá D.C., documento que debió haber sido expedido por la Corporación Autónoma Regional pertinente,

Proyectó Rosa Elvira Largo A.
Revisó : Elsa Judith Garavito
Aprobó: Nelson José Cstrillón
Exp. 08-06-2041 Acta 886 del 17-12-04
27-02-07



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

EL S 0564

Al evidenciarse la trasgresión a la normatividad ambiental, esta Secretaría en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, está llamada a iniciar investigación administrativa sancionatoria de carácter ambiental, tal y como quedará consignado en la parte dispositiva del presente acto administrativo; de igual manera, en desarrollo del principio de economía procesal, en el mismo acto administrativo se formularan los cargos por la infracción incurrida.

FUNDAMENTOS LEGALES:

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial el artículo 8, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibidem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que en el mismo sentido, el artículo 80 de la Carta Política preceptúa que, le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, contempla lo relacionado con las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando entre ellas: "17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.", concordante con el 65 que establece las atribuciones para el Distrito Capital.

Que el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, señala lo relacionado con las atribuciones de Policía, indicando: "El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los Departamentos, Municipios y Distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso".

Que en el mismo sentido, el artículo 84 Ibidem, dispone: "Cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal respectiva.", concordante con el artículo 85 que prevé los tipos de sanciones aplicables a los infractores de las normas

Proyectó Rosa Elvira Largo A.
Revisó : Elsa Judith Garavito
Aprobó: Nelson José Cstrillón
Exp. 08-06-2041 Acta 886 del 17-12-04
27-02-07



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

0564

sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, tales como sanciones y medidas preventivas, según la gravedad de la infracción. Dentro de estas últimas, se encuentra el decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, desarrolla el tema del dominio de los recursos naturales, indicando en su artículo 42 que: *"Pertenece a la Nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos"*, concordante con el artículo 43 que al tenor literal establece: *"El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este Código y otras leyes pertinentes"*.

Que en el mismo sentido el Decreto 1608 de 1978, en su artículo 6 dice: *"De conformidad con el artículo 248 del Decreto - Ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies de zocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este Decreto y en las disposiciones que los desarrollen"*.

Que unido a lo anterior el artículo 8 Ibidem, contempla: *"Las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974, y las contenidas en este Decreto se aplican a todas las actividades concernientes tanto a las especies de la fauna silvestre como a sus ejemplares y productos que se encuentran en forma permanente, temporal o transitoria en el territorio nacional"*.

Que el artículo 31 del Decreto 1608 de 1978, prevé: *"El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos solo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este Decreto"*.

Que a su vez, el Título VI de la norma anteriormente mencionada, desarrolla el tema de la movilización de individuos, especímenes y productos de la flora silvestre, indicando en el Capítulo I, artículo 196, lo relacionado con la movilización de especímenes de la fauna silvestre en el territorio nacional, indicando que: *"Toda persona que deba transportar individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El salvoconducto amparará únicamente los individuos, especímenes y productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo"*.

Proyectó Rosa Elvira Largo A.
Revisó : Elsa Judith Garavito
Aprobó: Nelson José Cstrillón
Exp. 08-06-2041 Acta 886 del 17-12-04
27-02-07



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
Ambiente

0564

Que la Resolución 438 de 2001 expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, señala que para el transporte de especímenes de la diversidad biológica que se realice dentro del territorio del país debe contar con el salvoconducto único nacional y en su Artículo Décimo Séptimo establece que el incumplimiento de lo dispuesto en dicha resolución dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 99 de 1993.

Que conforme lo establece el artículo 219 del Decreto 1608 de 1978, se consideran obligaciones generales en relación con la fauna silvestre, entre otras, la de amparar la movilización de los individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre con el respectivo salvoconducto y exhibir este documento cuando sea requerido por los funcionarios que ejercen el control y vigilancia.

Que el Parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, contempla al tenor literal: "*Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya*".

Que dado el hecho que las normas ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de transacción o renuncia a su aplicación por las autoridades ambientales o por los particulares, y que en la actualidad, el Decreto 1594 de 1984, no ha sido modificado o revocado por normatividad alguna, es pertinente para adelantar las investigaciones respectivas en materia ambiental, así como por el incumplimiento de las normas vigentes en la materia.

Que el artículo 197 del Decreto 1594 de 1984, establece: "*El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.*", disposición normativa concordante con el artículo 202 el cual establece: "*Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su entidad delgada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas del presente Decreto.*".

Que unido a lo anterior, el artículo 205 Ibidem, al tenor literal dice: "*Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación*", y el artículo 207 prevé: "*Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. Parágrafo: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite*".

Proyectó Rosa Elvira Largo A.
Revisó : Elsa Judith Garavito
Aprobó: Nelson José Cstrillón
Exp. 08-06-2041 Acta 886 del 17-12-04
27-02-07



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

150564

Que la señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, no dio cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto Ley 2811 de 1974 y en el Decreto 1608 de 1978, y Resolución 438 de 2001, en lo que respecta a la movilización de la fauna silvestre con el respectivo salvoconducto que la ampare, expedido por la Corporación correspondiente, por lo cual, como medida preventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, la Policía Ambiental y Ecológica de Bogotá D.C., incautó la especie, poniéndola a disposición del entonces Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente.

Que unido a lo anterior y en desarrollo de lo dispuesto en el literal I del artículo 3 del Decreto 561 de 2006, la Secretaría Distrital ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas, delegadas mediante Resolución 110 del 31 de Enero de 2007 en la Dirección Legal Ambiental.

Que de acuerdo con el régimen sancionatorio aplicable mediante el Decreto 1594 de 1984 y demás normas reglamentarias y concordantes, el procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad, y se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen.

Que en desarrollo de lo anterior y una vez verificada la conducta que trasgrede la normatividad ambiental, esta Secretaría, en aplicación del principio de economía procesal, dará inicio al procedimiento sancionatorio dentro del expediente DM 08-06-2041 y formulará cargos en contra del presunto infractor de la ley ambiental.

En consecuencia de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar investigación administrativa sancionatoria de carácter ambiental en contra de la señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía N° 29.804.991 de Paima (Cundinamarca), por su presunta violación a la normatividad ambiental vigente. Concretamente con lo establecido en los artículos 31 y 196 del Decreto 1608 de 1978 y Artículo Tercero de la Resolución 438 de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo a la señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.804.991 de Paima (Cundinamarca),

Proyectó Rosa Elvira Largo A.
Revisó : Elsa Judith Garavito
Aprobó: Nelson José Cstrillón
Exp. 08-06-2041 Acta 886 del 17-12-04
27-02-07



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
Ambiente

1° s 0564

Cargo Único: Hallar en su poder y transportar un (1) Perico Patilico (Pionites melanocephala), sin el respectivo salvoconducto de movilización y sin el respectivo permiso de aprovechamiento.

ARTÍCULO TERCERO: 3 La señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.804.991 de Paime (Cundinamarca), o su apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, podrá presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 del decreto 1594 de 1984.

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a cargo de la parte solicitante.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente DM-08-06-2041 estará a disposición del interesado en Archivo de Expedientes de esta entidad, de conformidad con el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la publicación de la presente resolución, mediante fijación en lugar público de la entidad y remitir copia a la Alcaldía Local de Fontibón, para que se surta el mismo trámite y publicarla en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA ELENA GÓMEZ DE ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.804.991 de Paime (Cundinamarca), en la Vereda Guacamayas en Granada (Meta)

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso de alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

23 MAR 2007


NELSON JOSÉ VALDÉS CASTRILLÓN
Director Legal Ambiental

Proyectó Rosa Elvira Largo A.
Revisó : Elsa Judith Garavito
Aprobó: Nelson José Cstrillón
Exp. 08-06-2041 Acta 886 del 17-12-04
27-02-07

